



NUE 179-A-2019 (AG)

**Palomo Sosa contra Corte de Cuentas de la República
(CCR)**

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con veintinueve minutos del diez de marzo de dos mil veinte.

1. Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Carlos Eduardo Palomo Sosa**, en adelante el apelante, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la Corte de Cuentas de la República (CCR). La información solicitada por el apelante consistente en:

“Diagnóstico del área jurisdiccional de la Corte de Cuentas de la República, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España”

De lo cual se ordenó en la resolución emitida por la oficial de información de la CCR, en auto de fecha 16 de octubre de 2019: “Infórmese al ciudadano lo manifestado por el Presidencia de esta Corte, detallado en el romano III de la presente resolución”. Para tal efecto dicho romano establece que según nota con número de referencia REF-PRES-166-2019, emitida por la Presidencia de la CCR: “que de conformidad a las causales de reserva en el art. 19 literales e) y g) de la LAIP, el documento solicitado ha sido reservado en su totalidad, respetando el trámite regulado por la mencionada ley para tales efectos, motivos por el cual se adjunta declaratoria de reserva”

Este Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado **Andrés Gregori Rodríguez** para dar el trámite de ley al presente caso, de conformidad a lo establecido en el artículo 87 de la LAIP. Asimismo, en pleno cumplimiento al derecho de defensa y audiencia



de las partes, en el auto de admisión del presente recurso, se solicitó la presentación a la CCR del informe de justificación del acto impugnado conforme al Art. 88 de la LAIP.

El ente obligado rindió el informe solicitado, por medio de su apoderado General Judicial, **José Napoleón Domínguez Escobar**, quien en lo medular manifestó que dicha institución no ha negado en ningún momento el derecho de acceso a la información del ciudadano apelante **Carlos Eduardo Palomo Sosa**, puesto que se diligenció según el trámite de ley en el plazo correspondiente la solicitud, pero no fue posible realizar entrega de lo requerido, ya que la información solicitada se encontraba declarada como reservada, en virtud del art. 19 literales e) y g) de la LAIP

Posteriormente, se realizó audiencia oral correspondiente, sin contar con la comparecencia de la parte apelante, **Carlos Eduardo Palomo Sosa**. Respecto al ente obligado su representación fue ejercida por **José Napoleón Domínguez Escobar**, quien señaló que no haría ofrecimiento probatorio en la tramitación del presente procedimiento. Posteriormente en la fase de alegatos, el citado profesional estableció en lo medular que el objeto de discusión en el presente caso es la disconformidad del apelante, es en virtud que no se le ha entregado el diagnóstico del área jurisdiccional de la Corte de Cuentas de la República, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España, pero el motivo de esa negativa radica en la declaración de reserva de dicha información, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 de la LAIP, dando lectura a los literales e) y g), y a la fundamentación de dicha declaratoria de reserva, confirmando el contenido del informe de defensa presentado por el ente obligado.

Considera que el diagnóstico contiene una radiografía de la institución que representa, de la cual se deben tomar decisiones para su mejora, por tal motivo se ha declarado la reserva del mismo. Aunado a ello, de hacerlo público se puede entorpecer los procesos administrativos que se pretenden desarrollar. Por lo cual, solicita la ratificación de la resolución emitida por la oficial de información de la CCR.

Finalmente, en la fase de preguntas aclaratorias realizadas por el Pleno de Comisionados de este Instituto, el citado profesional manifestó que la declaración de reserva es total sobre el diagnóstico realizado. Que el período de un año se ha dado por que se

pretende en ese tiempo tomar una decisión en relación a las acciones a realizar como consecuencia del diagnóstico. Que considera desde su percepción como empleado, que existe una especie de persecución o un ojo crítico contra la CCR que cualquier cosa que sale a lo público, y la radiografía detecta las áreas de mejoras y donde puede estar bien, pero en lo público se le empieza a atacar o cuestionar de manera severa a la institución, por los medios de comunicación y a nivel público, por lo cual considera que no es conveniente darlo a conocer antes de tomar las decisiones correspondientes, porque es información que se puede tergiversar o sacar de contexto.

Continúa manifestando, que no sabe si en dicho documento existen recomendaciones, pero sí puede asegurar que del mismo pueden devenir acciones de mejoras para la Institución, específicamente en el área jurisdiccional correspondientes a las Cámaras de primera y segunda instancia. Que el citado diagnóstico se realizó en dos etapas, inició en el 2018 y finalizó en el 2019. Que reconoce que dicho documento debe llegar a ser público, pero hasta que se tomen las decisiones correspondientes, pues el período que se ha dejado no es tan amplio. Que no considera posible hacer una versión pública, pues sería básicamente quitarle los razonamientos de los lineamientos donde se “está mal”, pero eso es lo esencial del diagnóstico.

2. Análisis del caso

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información requerida, valorando la naturaleza de la misma y los principios rectores de máxima publicidad, disponibilidad, integridad y rendición de cuentas. En este contexto, el examen del caso seguirá el *iter* lógico siguiente: (I) Definición de un diagnóstico y la determinación de su naturaleza cuando se realiza en un ente obligado; y (II) Análisis de la Declaratoria de Reserva PRES-001-2019, a efecto de determinar su legitimidad y legalidad, de conformidad a lo establecido en los Arts. 19, 20, 21 de la LAIP en relación a lo señalado en los Arts. 17, 19 y 36 del Reglamento de la LAIP.

I. En dable iniciar estableciendo que el Art. 6 letra “c” de la LAIP, define a la información pública como aquella que se encuentra en poder de los entes obligados, contenida en los documentos, archivos, datos, base de datos, comunicaciones y todo tipo de registro que documente el ejercicio de sus facultades o actividades que consten en cualquier



medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente a su fuente, fecha de elaboración y que no sea confidencial.

En el presente caso, se solicita información concerniente a un diagnóstico elaborado en colaboración con la cooperación internacional, para el caso del Reino de España, siendo el objeto de estudio el área jurisdiccional de dicho ente obligado, pues se debe retomar que por mandato constitucional la Corte de Cuentas de la República, tiene facultades jurisdiccionales dentro del ejercicio de sus funciones (Art. 196 de la Cn.).

Una vez establecido lo anterior, es pertinente señalar que por “diagnóstico” de acuerdo a la Real Academia¹ a señalado que es la acción y efecto de diagnosticar; entendiéndose diagnosticar por *recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza*. Entorno a tal concepto, se puede advertir que la información solicitada en el presente procedimiento, contiene datos que pueden arrojar problemas o áreas de mejora en el área jurisdiccional de la CCR, lo cual reviste de tal importancia, pues permite conocer las condiciones operativas de tan vital función que ejerce el órgano de control de la finanzas y gestión estatal conforme al Art. 195 de la Cn.

En ese sentido, es oportuno aclarar que tal diagnóstico *per se* no forma parte de la información contenida en un juicio de cuentas en particular, sino más bien corresponde a la evaluación realizada en general a toda el área jurisdiccional de la CCR, y en tal sentido al estar dentro de sus atribuciones constitucionales, su cumplimiento está supeditado al escrutinio público. Y es en esta contraloría ciudadana que el Derecho de Acceso a la Información Pública, se convierte en un mecanismo mediante el cual se ejerce esa labor de fiscalización y contraloría respecto del actuar de la administración pública, del cual no escapa ese ente contralor.

Lo anterior, ha sido retomado por este Instituto en el procedimiento de Apelación con referencia 103-A-2015, de fecha 11 de agosto de 2015, en el cual se afirmó: “el carácter de derecho fundamental del acceso a la información propicia el afianzamiento de democracias

¹ Ver: <https://dle.rae.es/diagn%C3%B3stico?m=form> (recuperado el 1 de marzo de 2020)

transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado".

Al respecto de la obligación de rendición de cuentas **Miguel Ángel Valverde Loya**, en *Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas: Elementos Conceptuales y el Caso de México*², ha establecido que: "Un elemento clave para la rendición de cuentas es el control y la fiscalización de los recursos públicos. La fiscalización es el proceso mediante el cual una autoridad vigila el uso de los recursos públicos (ya sean económicos, materiales o humanos), y se evalúan las acciones de gobierno considerando su racionalidad y apego a la ley..." **"El derecho a la información es otro componente clave de la rendición de cuentas y la transparencia.** Este derecho se puede definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan el acceso de los ciudadanos a la información de interés público, en especial la que se genera en los órganos del Estado..."

Es así que para algunos doctrinarios "la rendición de cuentas mantiene una idea de obligación en la que **los políticos y los funcionarios públicos son actores sujetos a dar cuentas o responder sobre sus decisiones y justificarlas en público.** De manera simultánea, representa "el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios, pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder" (Schedler, 2008). Schedler ilustra que **la rendición de cuentas consta de tres momentos básicos** que asisten en la prevención y abuso del poder: 1. Obligar al poder a abrirse a la inspección pública; 2. Queda sujeto de manera forzosa a explicar y justificar sus actos; y, 3. Permanece supeditado a la amenaza de sanciones (Schedler, 2008)..."³

Bajo este contexto, la información objeto de controversia en el presente procedimiento es información pública sujeta a contraloría ciudadana por el interés público que conlleva conocer el contenido de un informe que refleja el estado en el cual se encuentra

2

Ver: https://catedraunescohdh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Contenido/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_1_Valverde_Loya.pdf (Recuperado el 26 de febrero de 2020)

³ El Sistema de Rendición de Cuentas Mexicano y su interacción con la Archivística Información, Cultura y Sociedad: revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, núm. 30, junio-, 2014, Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina. (pág. 82).



la institución encargada de vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos y conocer de los juicios a que den lugar esas cuentas (Art. 195 numeral 3 de la Cn.), es decir de la Corte de Cuentas de la República.

II. A. No obstante lo anterior, la Ley de Acceso a la Información establece como límite al DAIP la información confidencial y la información reservada (Arts. 6 literales e) y f), 19, 21 y 24). En relación a dichas limitaciones se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”⁴, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: Que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, que **“las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”**, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”.

En este sentido, es pertinente señalar que la **información reservada**, se define como aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la LAIP—específicamente en el Art. 19 de la LAIP—, en razón de un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas —Art. 6 letra “e” de la LAIP—.

Al respecto, en el presente caso se alega por el ente obligado que el motivo por el cual no se entrega la información requerida es por la declaratoria de reserva con referencia PRES-001-2019, emitida en fecha 28 noviembre de 2018 y con fecha de vencimiento el 28 de junio de 2020, por los literales e) y g) art. 19 de la LAIP.

⁴ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

B. Ahora bien, el funcionario público encargado de clasificar la información debe tomar en cuenta la **legalidad, temporalidad y razonabilidad** del porqué se decide excluir temporalmente la información; una vez ha concluido el plazo de reserva, la información vuelve a ser pública y por lo tanto puede ser solicitada por cualquier persona en virtud del DAIP. Es importante señalar que las causales establecidas en el Art. 19 de la LAIP son taxativas y su interpretación restrictiva, por lo que no pueden invocarse otras que no estén señaladas en la ley.

De la lectura de la citada declaratoria de reserva, se advierte que la misma tiene como base una motivación genérica pues en la misma se ordena clasificar todo el documento que contiene el diagnóstico del área jurisdiccional de la CCR elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España sin hacer un análisis conforme al principio de máxima publicidad que permita tener acceso al menos a una parte de dicho documento.

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁵ ha señalado que: “Por lo general, las causales de reserva se limitan a la confidencialidad de los datos personales y a la reserva de la información que pueda afectar otros intereses como la seguridad nacional. No obstante, en algunos casos las excepciones son muy amplias sin que exista una definición conceptual clara y precisa de los términos utilizados en ellas o criterios legales para limitarlas, en consecuencia, su verdadero alcance se establece en el proceso de implementación, lo cual será objeto de futuros informes. Asimismo, en muchos marcos jurídicos no se establece la obligación de separar la información reservada de la que es pública, con lo cual los sujetos obligados podrían entender equivocadamente que si un documento tiene un aparte reservado puede mantener la reserva de todo su contenido, en contradicción con lo dispuesto por el principio de máxima publicidad”.

C. El análisis del presente caso debe partir de las causales bajo las cuales se ha emitido una declaratoria de reserva de la información requerida por el ciudadano Palomo Sosa, señalando el Art. 19 literal e) de la LAIP, que es información reservada *“La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores*

⁵ El derecho de acceso a la información pública en las Américas: Estándares interamericanos y comparación de marcos legales = The right to access to public information in the Americas : Inter-American standards and comparison of legal frameworks; 2011; página 167; párrafo 477.



públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”; y el literal g) del mismo cuerpo normativo, señala que es información reservada "La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso”.

En ambos casos, se debe establecer con la prueba correspondiente, que existe un proceso deliberativo y que no se ha tomado una decisión final al respecto; y determinarse qué funciones o estrategias estatales se comprometen con la difusión de tal información. En consecuencias, ambos elementos se tomarán en cuenta en el análisis de la declaratoria de reserva con referencia PRES-001-2019, emitida por la CCR.

D. En virtud de lo anterior es válido realizar algunas acotaciones respecto a la concurrencia de sus requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad, y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

(a) Legalidad. La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

(b) Razonabilidad. Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública como reservada. En esencia, no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

(c) Temporalidad. Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el Arts. 20 de la LAIP y 31 letra “f” de la RELAIP; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las personas, al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.

E. Entonces, al verificar el cumplimiento de estos tres requisitos, tomando en cuenta el análisis previamente realizado, es evidente que oportunamente se configuró como

información reservada, lo concerniente al diagnóstico del área jurisdiccional de la CCR, de conformidad a las letras e) y g) del art. 19 de la LAIP, por parte de la titular del ente obligado, por lo cual su emisión goza de legitimidad al haber sido suscrita por la funcionaria facultada para tal efecto.

F. Por lo anterior, corresponde verificar si se fundamentó en legal forma dicha restricción al Derecho de Acceso a la Información Pública, siendo el segundo requisito la razonabilidad, y para lo cual, no basta con que el ente obligado cite normativas que lo habiliten a denegar la información por considerarla reservada, también es necesario que se razone la adopción de una limitación y de fundamentar la clasificación de un documento (reguladas en el Art. 21 de la LAIP); con ello se busca reducir la arbitrariedad de los funcionarios que tienen la potestad de clasificar la información y evitar denegaciones injustificadas al acceso (Art. 28 del Reglamento de la LAIP).

Al respecto, es importante señalar que el requisito de razonabilidad no se agota con la simple argumentación, sino que, como todo acto que emana de la Administración Pública, la motivación debe ser congruente, de no ser así, la reserva carece de sustento. De manera que, con relación a este requisito, la declaratoria de reserva estipula que este acto administrativo responde a que su contenido expresa opiniones que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, argumentando el apoderado del ente obligado que del resultado de dicho diagnóstico se deben tomar decisiones de mejoras para la CCR, y que este proceso responde a una estrategia institucional.

Sin embargo, en este punto el ente obligado no realizó ofrecimiento probatorio que permitiera establecer la existencia de un plan de acción encaminado a dar cumplimiento al *diagnóstico del área jurisdiccional de la Corte de Cuentas de la República, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España*, o el presunto proceso deliberativo del que forma parte el resultado de tal diagnóstico. Tampoco se probó la estrategia de algún procedimiento administrativo que se compromete con la entrega de la referida información y menos su estado, limitándose a realizar juicios de valor respecto a la probabilidad de un análisis negativo de su contenido, que podría afectar la imagen de la CCR, con lo cual se tiene por establecido que no se ha realizado una interpretación adecuada, en atención del



Derecho de Acceso a la Información Pública, la transparencia y rendición de cuentas a la que está obligada la CCR como ente de control y ente obligado a la LAIP de acuerdo a su Art. 7.

Es decir, tal declaración de reserva emitida en este caso carece de razonabilidad, pues representa un obstáculo para la labor de fiscalización de la ciudadanía y si bien puede generar un descontento social con el quehacer de la CCR; sin embargo, su publicidad propicia mayor transparencia en la gestión pública que se realiza, conocer sus problemas sistémicos; por tanto, oportunidades de mejora en la institución, en lo cual la ciudadanía puede jugar un papel importante.

G. Finalmente respecto del requisito de temporalidad, en este caso debe considerarse dos puntos importantes para la eficacia de la declaratoria de reserva número PRES-001-2019, pues la misma fue decretada el 1 de julio de 2019 por el periodo de un año, sin que se haya establecido por parte del ente obligado la fecha en la cual se emitió dicho documento, pues si bien la normativa le faculta realizar una clasificación posterior (Art. 19 del RLAIP), el periodo de clasificación se cuenta de forma retroactiva a la fecha de la emisión del documento, es decir, desde que la información fue generada (Art. 36 RLAIP), no siendo claro ni para el ciudadano ni para este Instituto la fecha exacta de su finalización.

Asimismo, ha sido evidente que la restricción al acceso del *diagnóstico del área jurisdiccional de la Corte de Cuentas de la República, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España*, fue a partir de la declaratoria de reserva del 1 de julio de 2019, no habiéndose clasificado de forma oportuna la misma, por lo cual su contenido permaneció por un tiempo determinado accesible para el público, volviendo ineficaz una declaratoria de reserva a esta fecha.

Aunado a lo anterior, es válido hacer un análisis convencional de la restricción realizada por la Corte de Cuentas de la República, valorando que el derecho de acceso a la información se encuentra anclado al derecho de libertad de expresión (Art. 6 de la Cn y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos), en tal sentido para determinar el plazo de su restricción debe hacerse conforme al principio de legalidad y proporcionalidad.

En reiteradas líneas resolutivas este Instituto ha insistido que “el período por el cual se restringe el acceso a una información pública [...] debe someterse a un examen de

proporcionalidad y cumplir con los estándares para clasificarla como reservada...”⁶. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia emitida en el caso *Claude Reyes y otros, vs Chile*, de fecha 19 de septiembre de 2006, ha establecido que: “... *la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.*”

“...Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho”.

Es así, que, aunque en principio se advierte que el plazo de vigencia de la restricción al acceso de la información solicitada en este caso es un periodo relativamente corto, del mismo no se ha logrado establecer proporcionalidad y necesidad del mismo, por lo cual es pertinente revocar dicha declaratoria de reserva a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información del ciudadano apelante.

H. Es importante en este punto, señalar que la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad con referencia 136-2014/ 141-2014, en resolución de fecha 15 de febrero de 2017, ha establecido que: “...*toda persona tiene el derecho a conocer la manera en que los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, y de ello deriva el derecho*

⁶ Ref. 005-A-2013 de fecha 26 de junio de 2013; Ref. 008-A-2013 de fecha 19 de junio de 2013; Ref 20-A-2013 del 3 de octubre de 2013.



de acceso a la información pública. Además, la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno, sino a la titularidad que se tiene sobre este derecho fundamental. Los servidores públicos disponen de la información precisamente en su calidad de delegados del pueblo o representantes de los ciudadanos...”; lo cual, ratifica el legítimo interés que tiene la población de conocer el contenido del diagnóstico del área jurisdiccional de la Corte de Cuentas de la República, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España.

Por tanto, es pertinente revocar la resolución emitida por la oficial de información de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en fecha 16 de octubre de 2019 y desclasificar la información correspondiente al *“Diagnóstico del área jurisdiccional de la Corte de Cuentas de la República, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España”*, considerando que el interés público radica en que la población tiene el derecho de conocer las condiciones operativas de esa área, pues realiza una importante labor en el tema de juzgar lo que las auditorías realizan, de conformidad a lo establecido en los Arts. 1, 3, 5 numeral 11, 8-A-, de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 26, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

a) Revocar la resolución impugnada, la cual fue emitida por la oficial de información de la **Corte de Cuentas de la República (CCR)**, en fecha 16 de octubre de 2019.

b) Desclasificar la información concerniente al *“Diagnóstico del área jurisdiccional de la CCR, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España”*.

c) Ordenar a la CCR, por medio de su titular, que, dentro del plazo de **tres días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, entregue al ciudadano **Carlos Eduardo Palomo Sosa: Diagnóstico del área jurisdiccional de la Corte de**

Cuentas de la República, elaborado con el apoyo del Tribunal de Cuentas del Reino de España.

d) **Ordenar a la CCR** que por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo indicado anteriormente, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

e) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

g) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese. -


PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

SD/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



